Señores.

**JUZGADO DÉCIMO (10°) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE POPAYAN**

[Jadmin10ppn@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:Jadmin10ppn@cendoj.ramajudicial.gov.co)

**REFERENCIA**: CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

**MEDIO DE CONTROL**: REPARACIÓN DIRECTA

**RADICADO**: 19001-33-33-010-2021-00204-00

**DEMANDANTES**: LAURA DANIELA QUIRA VIQUEZ Y OTROS

**DEMANDADO**: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OTROS

**LLAMADOS EN GTÍA**.: **CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.Y OTROS.**

**GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA**,identificado con cédula de ciudadanía No. 19.395.114 de Bogotá, abogado titulado y en ejercicio, portador de la tarjeta profesional No. 39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en mi calidad de apoderado general de **CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.,** sociedad comercial anónima de carácter privado, legalmente constituida**,** con domicilio principal en la carrera 7 número 71-21 torre B piso 7, de la ciudad de Bogotá D.C., identificada con el NIT. 860.026.518-6, , como consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio que se aporta con el presente documento, donde se observa el mandato general a mi conferido a través de Escritura Pública No. 1599 del 24 de noviembre de 2016 otorgada en la Notaría 28 de la ciudad de Bogotá. Encontrándome dentro del término legal, comedidamente procedo, en primer lugar, a **CONTESTAR LA DEMANDA** propuesta por la señora Laura Daniela Quira Viquez y otros en contra de la sociedad **NUEVO CAUCA S.A.S.** y en segundo lugar, a **CONTESTAR EL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA** formulado por este a mi prohijada, para que en el momento en que se vaya a definir el litigio se tengan en cuenta los hechos y precisiones que se hace a continuación, según las pruebas que se practiquen, anticipando que me opongo a todas y cada una de las pretensiones sometidas a consideración de su despacho tanto en la demanda como en el llamamiento en garantía, en los siguientes términos:

**CAPÍTULO I. OPORTUNIDAD**

Teniendo en consideración que la notificación personal del Auto Interlocutorio No. 584 del 15 de mayo de 2024 se efectuó el día 04 de junio de esta anualidad, de acuerdo a lo reseñado en el artículo 199 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo modificado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 el término empezó a contarse desde el 07 de junio de 2024, hasta el día 28 de junio de 2024, por lo que se concluye que el escrito se presenta dentro del término de ley.

**CAPÍTULO II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.**

1. **FRENTE A “HECHOS” DE LA DEMANDA**

**Frente al hecho denominado “PRIMERO”:** A mi prohijada no le consta de manera directa que la señora LAURA DANIELA QUIRAZ VIQUEZ sea ingeniera industrial. Lo anterior, toda vez que, se trata de una situación ajena al objeto comercial que desarrolla la aseguradora que represento. Por lo anterior, es la parte actora quien debe acreditar lo aquí señalado.

**Frente al hecho denominado “SEGUNDO”:** A mi prohijada no le consta de manera directa que la señora LAURA DANIELA QUIRAZ VIQUEZ al momento del supuesto hecho se encontraba trabajando para la empresa VATIA S.A. E.S.P, toda vez que se trata de una situación totalmente ajena al objeto comercial que desarrolla, de manera que la carga de su demostración recae única y exclusivamente sobre la parte demandante, quien deberá acreditar tales afirmaciones a través de los medios probatorios que considere pertinentes. Sumado a esto, si bien se aportó con la demanda un certificado, este no se acompañó del contrato de trabajo, desprendibles de pago, planillas, certificado de ADRES o RUAF, entre otros medios que den soporte al certificado y demuestren el hecho.

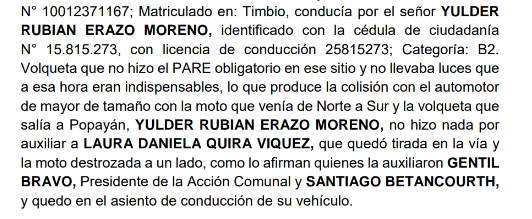
**Frente al hecho denominado “TERCERO”:** No es un hecho, es la enunciación de un medio de prueba que aportó la demandante, no obstante, dicha prueba no es suficiente para evidenciar ningún tipo de perjuicio, hecho o daño. Por ello, es la parte actora quien debe acreditar lo previamente señalado con otros medios de prueba.

**Frente al hecho denominado “CUARTO”:** No es un hecho, es la descripción de un medio de prueba que aporta la demandante, no obstante, dicha prueba no es suficiente para vislumbrar algún tipo de perjuicio, hecho o daño. Por tanto, es la parte actora quien debe acreditar lo previamente señalado.

**Frente al hecho denominado “QUINTO”:** No es un hecho, es la descripción de un medio de prueba que aporta la demandante, no obstante, dicha prueba no es suficiente para divisar algún tipo de perjuicio, la existencia del hecho o daño. De este modo, la parte actora deberá canalizar su esfuerzo procesal en acreditar lo aquí señalado.

**Frente al hecho denominado “SEXTO”:** No es un hecho, es la descripción de un medio de prueba que aporta la demandante, no obstante, dicha prueba no es suficiente para entrever algún tipo de perjuicio, hecho o daño. Por ello, la carga probatoria le corresponde a la parte actora.

**Frente al hecho denominado “SEPTIMO”:** A mi representada no le consta de manera directa las afirmaciones sobre lo sucedido el día 23 de agosto de 2019, toda vez que mi prohijada no estaba presente en el lugar de los hechos, además, no es un hecho propio de la aseguradora y que por ende no lo puede confesar. No obstante, solicito que se tenga como confesión la manifestación realizada por el apoderado de la parte actora, en donde afirmó que el hecho ocurrió por el supuesto actuar negligente de un tercero ajeno a NUEVO CAUCA S.A.S.:



Por ello, solicitó que se aplique el art 193 del CGP, por remisión expresa del CPACA. Al existir una confesión de apoderado judicial.

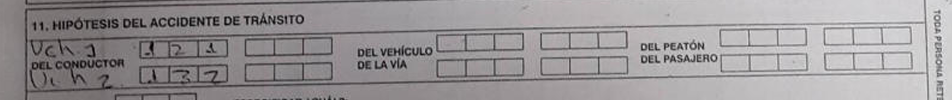
**Frente al hecho denominado “OCTAVO”:** A mi representada no le consta de manera directa, el supuesto diagnóstico de la señora LAURA DANIELA QUIRAZ VIQUEZ, toda vez que no es un hecho propio y no lo puede negar, ni infirmar. Además, las lesiones padecidas por la señora LAURA DANIELA QUIRAZ VIQUEZ sean resultado del supuesto accidente, puesto que no están claras las condiciones de tiempo, modo y lugar del accidente, máxime cuando el agente de tránsito levanta el IPAT con posterioridad a la ocurrencia del supuesto hecho. Por tanto, se trata de una situación subjetiva que carece de soporte; es menester resaltar que las apreciaciones subjetivas no corresponden a hechos y su cita desconoce la técnica procesal.

**Frente al hecho denominado “NOVENO”:** No es ciertoque al momento del accidente la vía no tenía ninguna señalización,. Por otro lado, no existe prueba alguna que la parte actora haya aportado en el que se evidencie que se le permitió a YULDER RUBIAN ERAZO MORENO conducir sin luces. Ahora bien, el no llevar las luces encendidas es imputable al conductor y no a la ANI o a ninguna de las demandadas. Sumado a esto, las demás afirmaciones manifestadas, no son hechos sino apreciaciones enteramente subjetivas que no están probadas.

Finalmente, es importante resaltar que de las pruebas aportadas por la demandante se evidencia que el lugar si cuenta con señalización, como se puede evidenciar:



Además, se observa del IPAT que la causa de accidente fue una concurrencia de culpas de la victima con un tercero. Así:



**Frente al hecho denominado “DECIMO”:** No es un hecho, es una carga procesal para interponer la demanda por el medio de control de reparación directa.

1. **FRENTE A “*LO QUE SE PRETENDE”* DE LA DEMANDA**

Me opongo a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, por carecer de fundamentos fácticos, jurídicos y probatorios que hagan viable su prosperidad. En las pretensiones de la demanda es notorio el deseo desproporcionado del extremo actor por lucrarse, debido a que no logra, siquiera de forma sumaria, demostrar los elementos esenciales para que se configure la eventual responsabilidad en cabeza de la parte pasiva.

**Frente la pretensión denominada “PRIMERO”:** Me opongo a que se acceda a la solicitud de declaratoria de responsabilidad de la entidad demandada **NUEVO CAUCA S.A.S.** por los supuestos perjuicios ocasionado a los demandantes en el supuesto accidente ocurrido 23 de agosto de 2019, toda vez que no existe en el plenario una prueba siquiera sumaria que dé cuenta de alguna responsabilidad en cabeza de **NUEVO CAUCA S.A.S.** Pues, no hay ningún tipo de evidencia en el plenario que establezca que por parte de **NUEVO CAUCA S.A.S.** se haya desarrollado alguna conducta negligente u omisiva que hubiese sido la desencadenante de los hechos reprochados. Aunado a esto, La verificación y seguimiento de que un vehículo cumpla con las normas, está en cabeza de la policía de carreteras, no en la entidad demandada **NUEVO CAUCA S.A.S.**

**Frente la pretensión denominada “1.A (DAÑO EMERGENTE)”:** Me opongo a que se condene a la entidad demandada, **NUEVO CAUCA S.A.S.,** a indemnizar a la aquí demandante por el supuesto daño emergente sufrido. Máxime, cuando no existe dentro del plenario prueba de los supuestos gastos o erogaciones económicas que tuvieron que sufragar la demandante como consecuencia del hecho objeto del presente litigio, toda vez que ni siquiera se aportaron pruebas de efectivamente ella haya realizado el pago de los perjuicios reclamados, incluso, confiesa que dichos pagos los cubrió el SOAT, por ende, ella no realizó pago alguno. Por lo tanto, se evidencia la ausencia de material probatorio para reconocer este rubro. Además, tampoco existe ninguna prueba que soporte los supuestos 30 millones que la demandante ha “invertido”.

**Frente la pretensión denominada “1.B (DAÑO MATERIAL, DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE)”:** Me opongo a que se condene a la entidad demandada, **NUEVO CAUCA S.A.S.** al reconocimiento y pago de los perjuicios reclamados. Máxime cuando no existe en el plenario una prueba tan siquiera sumaria que dé cuenta de la omisión o negligencia por parte de **NUEVO CAUCA S.A.S.**. Por lo tanto, no hay lugar al reconocimiento y pago de las sumas pretendidas, pues la parte accionante únicamente realiza una valoración de exorbitante de los perjuicios sin tan siquiera probar los mismos. Y, es claro que en estos casos impera el principio de la carga de la prueba tanto de la supuesta culpa o falla del servicio, como del daño, de la cuantía del supuesto detrimento y el nexo de causalidad entre uno y el otro; elementos los cuales se echan de menos en esta causa.

**Frente la pretensión denominada “SUBSIDIO”:** Me opongo a su reconocimiento, toda vez que esta pretensión desconoce todo el Sistema de Seguridad Social colombiano. teniendo presente que la entidad demandada no tiene obligación alguna con la demandante a reconocer pensión de invalidez, incluso, ni siquiera tiene competencia para hacerlo, por ende, la parte actora desconoce al pretender que el Municipio le reconozca pensión de invalidez todo el régimen de seguridad social.

**Frente al perjuicio denominado “2. DAÑO A LA SALUD”:** Me opongo a que se condene a la entidad demandada, **NUEVO CAUCA S.A.S.**.a indemnizar a la aquí demandante por el supuesto daño a la salud. Se insiste en que al plenario no se arrimó una sola prueba que diera cuenta de que el hecho era atribuible a la entidad, así como tampoco se aportó con la demanda las supuestas secuelas padecidas por la demandante en razón de la lesión que es objeto de demanda, ni se aportó elemento técnico alguno que evidenciara la gravedad de la misma, como por ejemplo dictamen de EPS, de la Junta Regional de Calificación de Invalidez o de especialista en daño corporal, por lo cual al no estar probado esto, lo alegado en el líbelo inicial tendrá que tenerse por desestimado. Adicionalmente, el mismo desborda los lineamientos planteados por el Consejo de Estado en sentencia de Unificación.

**Frente la pretensión denominada “3.A (DAÑO EMERGENTE)”:** Me opongo a que se condene a la entidad demandada, **NUEVO CAUCA S.A.S.,** a indemnizar a la aquí demandante por el supuesto daño emergente sufrido. Máxime, cuando no existe dentro del plenario prueba de los supuestos gastos o erogaciones económicas que tuvo que sufragar la demandante como consecuencia del hecho objeto del presente litigio, toda vez que ni siquiera se aportaron pruebas de efectivamente ella haya realizado el pago de los perjuicios reclamados,

**Frente al perjuicio denominado “4. DAÑO MORAL” (4A,4B,4C,4D):** Respetuosamente manifiesto al despacho que, aunque las pretensiones de la demanda NO están dirigidas en contra de mi representada, me opongo a que se condene a la entidad demandada, **NUEVO CAUCA S.A.S**

a indemnizar a la aquí demandante porlos supuestos daños morales sufridos, toda vez que ni siquiera se aportaron pruebas de que el hecho se deba a una negligencia u omisión de la demandada, y así mismo no se acreditan los elementos de la responsabilidad. Además, me opongo por cuanto los mismos son excesivos y desbordan los lineamientos establecidos en la Sentencia de Unificación del Consejo de Estado en caso de lesiones, no se aportó con la demanda documento que determine la gravedad de la supuesta lesión sufrida por la señora **Laura Quira Viquez.** Para casos de lesiones el Consejo de Estado ha señalado por cada gravedad de lesión un monto máximo en salarios mínimos legales mensuales vigentes para los diferentes niveles de relación afectiva. En el caso en mención no existen elementos materiales probatorios que den cuenta de la existencia de responsabilidad de **NUEVO CAUCA S.A.S**, como tampoco la gravedad de lesión, ni mucho menos que la misma sea mayor al 50% para que la parte actora solicite cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, como si determinara su gravedad como superior al 50%, sobrepasando completamente los topes establecidos por la jurisprudencia contenciosa, por lo que resulta antitécnico solicitar perjuicios morales sin tener prueba concreta de su existencia, evidenciando su ánimo injustificado de lucro.

1. **EXCEPCIONES FRENTE A LA DEMANDA**

En el presente acápite se presentarán los fundamentos de hecho y de derecho que en general, sustentan la oposición a las pretensiones de la demanda y que en particular dan cuenta de que la demandante no ha probado, como es su deber, la existencia de todos los supuestos normativos de la presunta responsabilidad patrimonial que pretende endilgarse a la parte demandada en este litigio.

Sustento la oposición a las pretensiones invocadas por el extremo activo de este litigio de conformidad con las siguientes excepciones:

1. **FALTA EN LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA DE NUEVO CAUCA S.A.S.**

Es menester indicar al despacho que no existe legitimación en la causa por pasiva por parte de **NUEVO CAUCA S.A.S.,** pues, si bien la demandante manifestó de manera imprecisa que le asiste responsabilidad a diversos demandados, incluyendo al asegurado, esta afirmación no estpa acreditada en el proceso que nos ocupa, visto que la presunta responsabilidad derivada de la coalición vehicular recae única y exclusivamente sobre la propia víctima y un tercero, toda vez que la vía contaba con la señalización correspondiente y se encontraba en perfecto estado.

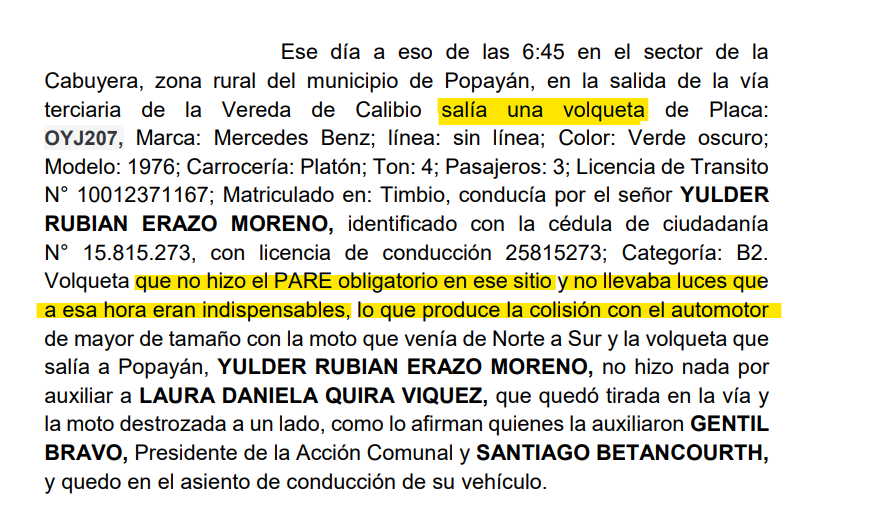
La exigencia de legitimación en la causa por pasiva alude a la aptitud que debe reunir la persona –natural o jurídica– contra quien se dirige la demanda para oponerse jurídicamente a las pretensiones que el demandante esgrime en su contra. En ese sentido, no basta con ser objeto de demanda para concurrir legítimamente a un juicio, es imperioso estar debidamente legitimado para ello. Al respecto destaca la Sala que la jurisprudencia de esta Corporación ha distinguido entre la legitimación en la causa de hecho y la legitimación en la causa material; distinción que se ha expuesto en los siguientes términos

“(…) Toda vez que la legitimación en la causa de hecho alude a la relación procesal existente entre demandante legitimado en la causa de hecho por activa y demandado legitimado en la causa de hecho por pasiva y nacida con la presentación de la demanda y con la notificación del auto admisorio de la misma a quien asumirá la posición de demandado, dicha vertiente de **la legitimación procesal se traduce en facultar a los sujetos litigiosos para intervenir en el trámite del plenario y para ejercer sus derechos de defensa y de contradicción; la legitimación material, en cambio, supone la conexión entre las partes y los hechos constitutivos del litigio, ora porque resultaron perjudicadas, ora porque dieron lugar a la producción del daño.**

De ahí que un **sujeto pueda estar legitimado en la causa de hecho pero carecer de legitimación en la causa material, lo cual ocurrirá cuando a pesar de ser parte dentro del proceso no guarde relación alguna con los intereses inmiscuidos en el mismo, por no tener conexión con los hechos que motivaron el litigio**, evento éste en el cual las pretensiones formuladas estarán llamadas a fracasar puesto que el demandante carecería de un interés jurídico (…)”.

En suma, en un sujeto procesal que se encuentra legitimado de hecho en la causa no necesariamente concurrirá, al mismo tiempo, legitimación material, **pues ésta solamente es predicable de quienes participaron realmente en los hechos que han dado lugar a la instauración de la demanda o, en general, de los titulares de las correspondientes relaciones jurídicas sustanciales**; por consiguiente, el análisis sobre la legitimación material en la causa se contrae a dilucidar si existe, o no, relación real de la parte demandada o de la demandante con la pretensión que ésta fórmula o la defensa que aquella realiza, pues la existencia de tal relación constituye condición anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito favorable a una o a otra (…)” (Subrayado y negrillas fuera de texto).

Ahora bien, en el caso concreto, se puede evidenciar que la demandante es muy clara en determinar quien es el sujeto llamado a responder, pues, señaló que fue el conductor de una volqueta que no realizó el PARE respectivo, tal y como se puede apreciar el hecho séptimo de la demanda:

****

Por ello, no obra prueba alguna que evidencien que la vía se encontraba en mal estado, o que haya sido la determinante para que se produzca el daño, de hecho, la vía contaba con señalización y excelente estado. Además, **NUEVO CAUCA S.A.S.** no tiene la competencia de controlar que los vehículos lleven las luces encendidas.

En conclusión, de la lectura de cada uno de los hechos planteados por la parte demandante, se extrae que en ninguno se hace referencia a la competencia **NUEVO CAUCA S.A.S.** pues, como se indicó, la vía contaba con la señalización correspondiente y sin imperfecciones. Además, **NUEVO CAUCA S.A.S.** no tiene la competencia de control del transito para determinar quien lleva o no las luces encendidas, aunado a esto, no se aportó prueba alguna que efectivamente el vehículo no llevara las luces encendidas y que las autoridades correspondientes lo permitiesen. Finalmente, de la demanda se evidencia que el hecho se presenta por culpa de la víctima, que se explicará más adelante, y el hecho de un tercero, que también se explicaran más adelante en otra excepción, sin existir una explicación clara de la competencia de **NUEVO CAUCA S.A.S.**

1. **INEXISTENCIA DE LA FALLA DE LA PRESTACION DEL SERVICIO - NUEVO CAUCA S.A.S. CUMPLIÓ A CABALIDAD LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES**

En los hechos ocurridos el día **23 de agosto de 2019**, no existió responsabilidad por parte de **NUEVO CAUCA S.A.S.** al no allegarse una prueba tan siquiera sumaria que acreditara la ocurrencia del hecho en la forma como lo narra la parte actora, ni mucho menos que el mismo se deba a una omisión o negligencia por parte de la demandada, toda vez que según las pruebas aportadas en el expediente, **NUEVO CAUCA S.A.S.** ha cumplido a cabalidad con sus obligaciones contractuales, las cuales eran la financiación, construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación, mantenimiento y reversión del corredor Popayán - Santander de Quilichao, de acuerdo con el Apéndice Técnico 1 y los demás Apéndices Técnicos del contrato. Además,no existió una falla en la prestación de servicios puesto que la vía se encontraba señalizada y en perfecto estado.

En relación a la falla en la prestación de servicios, el Consejo de Estado ha determinado que la “*falla del servicio o la falta en la prestación del mismo se configura por retardo, por irregularidad, por ineficiencia, por omisión o por ausencia del mismo*”. (Consejo de Estado, 2012, Rad. : 25000-23-26-000-1996-03282-01(20042)). Sin embargo, es trascendental que la autoridad a la que se le imputa responsabilidad sea competente y esté dentro de sus funciones la prestación del mismo. Al respecto la jurisprudencia contenciosa ha indicado que:

En efecto, frente a supuestos en los cuales se analiza si procede declarar la responsabilidad del Estado como consecuencia de la producción de daños en cuya ocurrencia ha sido determinante la omisión, por parte de una autoridad pública, en el cumplimiento de las funciones que el ordenamiento jurídico le ha atribuido, la Sala ha señalado que es necesario efectuar el contraste entre el contenido obligacional que, en abstracto, las normas pertinentes fijan para el órgano administrativo implicado, de un lado, y el grado de cumplimiento u observancia del mismo por parte de la autoridad demandada en el caso concreto, de otro. Ahora bien, una vez se ha establecido que la entidad responsable no ha atendido o lo ha hecho de forma deficiente o defectuosa al referido contenido obligacional, esto es, se ha apartado por omisión del cabal cumplimiento de las funciones que el ordenamiento jurídico le ha asignado, es menester precisar si dicha ausencia o falencia en su proceder tiene relevancia jurídica dentro del proceso causal de producción del daño atendiendo, de acuerdo con la postura que reiteradamente ha sostenido la Sala, a las exigencias derivadas de la aplicación de la teoría de la causalidad adecuada. (Consejo de Estado, 2007, rad.25000-23-26-000-2000-02359-01(27434))

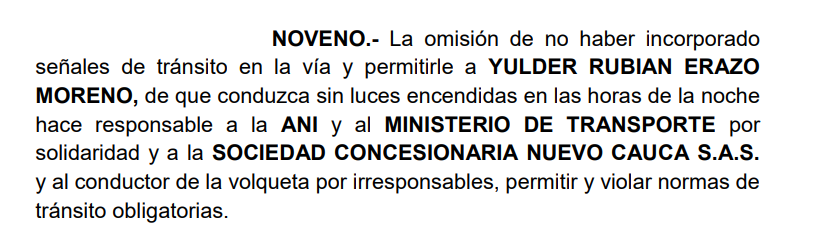
Del texto normativo anterior se extrae que existe responsabilidad siempre y cuando la omisión de una de las funciones que la autoridad administrativa sea competente haya sido la determinante para la producción del daño. Ahora bien, también es importante saber cuando existe un incumplimiento contractual que haya producido la falla en la prestación de servicio, pues, se debe tener presente que la autoridad administrativa puede trasladar dicha obligación a un particular a través de un contrato, por ello, la Jurisprudencia contenciosa administrativa ha indicado lo siguiente:

Los contratos, amén de regular o extinguir una relación jurídica de contenido económico, también pueden crear relaciones obligacionales y como quiera que en las relaciones jurídicas de esta estirpe una de las partes (el deudor) debe desplegar una conducta (la prestación) en favor de la otra (el acreedor), se sigue que el comportamiento desplegado por el deudor en favor del acreedor solo puede ser tenido como satisfacción de la prestación (pago) en la medida en que se ajuste plenamente a lo convenido.

No otra cosa se deduce de lo preceptuado en los artículos 1626, 1627 y 1649 del Código Civil al disponer, respectivamente, que “el pago efectivo es la prestación de lo que se debe”, que “el pago se hará bajo todos los respectos en conformidad al tenor de la obligación; sin perjuicio de lo que en los casos especiales dispongan las leyes” y que “el deudor no puede obligar al acreedor a que reciba por partes lo que se le deba, salvo el caso de convención contraria, y sin perjuicio de lo que dispongan las leyes en casos especiales.”

En consecuencia, se estará en presencia de un incumplimiento si la prestación no se satisface en la forma y en la oportunidad debida y si además esa insatisfacción es imputable al deudor. (Consejo de Estado,2013, 73001-23-31-000-1997-14722-01(25131))

En el caso concreto la demandante afirma que era el supuesto accidente ocurrió por falta de señalización vial, toda vez que expresa lo siguiente:



Sin embargo, esta afirmación es completamente errónea, puesto que, de las mismas pruebas aportadas por el apoderado de la parte actora, se puede evidenciar que la vía si contaba con la señalización necesaria, tal y como se puede observar:



Lo que según el artículo 193 del CGP, se constituye como una confesión de parte. Adicionalmente, de la respuesta de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (en adelante ANI), se puede evidenciar el documento emitido por Unión Temporal 4G de interventoría, dentro de este se estableció de manera clara que el lugar si contaba con señalización y esta se encontraba en buen estado. Así:



Asimismo, es relevante tener presente que si bien entre **ANI** y **NUEVO CAUCA S.A.S** se celebró el contrato de Concesión bajo el esquema APP No. 011 de 2015. Proyecto *“Popayán - Santander de Quilichao”,* **NUEVO CAUCA S.A.S** nunca ha incumplido sus obligaciones contractuales, pues, se evidencia que la vía se encontraba con la señalización vial y en buen estado.

Por consiguiente, se puede concluir que no existió una omisión o negligencia por parte de **NUEVO CAUCA S.A.S,** toda vez que ha cumplido cabalmente las obligaciones contractuales adquiridas, además, la vía se encuentra en perfecto estado con su respectiva señalización, la cual igualmente se encuentra en óptimas condiciones.

1. **CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCITMA COMO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD**

Si bien es cierto dentro de las pruebas aportadas por el demandante dentro del proceso se evidencia la inexistencia de responsabilidad a cargo de **NUEVO CAUCA S.A.S.**, en el remoto evento que el despacho considere que sí existió algún tipo de imputación o responsabilidad a dicha entidad, se deberá evaluar la conducta de la víctima, puesto que fue la que de forma exclusiva y determinante provocó el supuesto daño, al no mantener la distancia de seguridad, y posiblemente conducir a exceso de velocidad.

En este punto es importante resaltar la extensa jurisprudencia del Consejo de Estado sobre el hecho o culpa de la víctima, toda vez que en su jurisprudencia determinó que “*para que el hecho o culpa de la víctima como causal eximente de responsabilidad tenga plenos efectos liberatorios, resulta determinante que la conducta del propio perjudicado sea fundamento y raíz del menoscabo, es decir, que el comportamiento de éste se erija como causa adecuada, decisiva y determinante en la producción o resultado del hecho lesivo o que haya contribuido a su propia afectación debiendo o pudiendo evitarla”* (Consejo de Estado, 2024, rad. 47001233100020110047101 (68514)).

Por otro lado, respecto al valor probatorio de las fotografías, es preciso aclarar que el Consejo de Estado en sentencia del 13 de junio de 2013, Magistrado Ponente Dr. Enrique Gil Botero ha señalado que las fotografías por sí solas no dan cuenta del tiempo, modo y lugar en la que ocurrió el hecho:

FOTOGRAFIAS - Pruebas documentales. Valor probatorio. Valoración probatoria Sobre la posible valoración de las fotografías que fueron allegados al proceso por el demandante, y que pretenden demostrar la ocurrencia de un hecho, debe precisarse que éstas sólo dan cuenta del registro de varias imágenes, sobre las cuales **no es posible determinar su origen, ni el lugar, ni la época en que fueron tomadas, y al carecer de reconocimiento o ratificación, no pueden ser cotejadas con otros medios de prueba allegados al proceso.** (…) se tiene que las fotografías son pruebas documentales que **el juez está en la obligación de examinar bajo el criterio de la sana crítica, siempre y cuando se hayan verificado los requisitos formales para la valoración de ese tipo de medios probatorios, esto es, la autenticidad y la certeza de lo que se quiere representar**. En el asunto en estudio, de las fotografías aportadas no se puede determinar su origen, ni el lugar, ni la época en que fueron tomadas y carecen de reconocimiento o ratificación (…) (negrilla y subrayada fuera del texto original)

En el caso concreto, la demandante acompaña su relato con unas fotografías, de las cuales no se evidencia las circunstancias de modo, tiempo y lugar en la que ocurrió el hecho. Aunado a esto, analizando las otras pruebas aportadas al proceso por la demandante, evidenciamos que el supuesto hecho, se produjo por la conducta de la víctima, toda vez que fue la determinante del daño al violar flagrantemente el Código Nacional de Tránsito, concretamente el artículo 74 que reza “*Los conductores deben reducir la velocidad a treinta (30) kilómetros por hora en los siguientes casos […] En proximidad a una intersección”.* además, no mantuvo la distancia de seguridad.

Lo anterior se puede evidenciar, inicialmente del IPAT aportado, toda vez que este indica que el lugar tenía una iluminación buena, por ello, la demandante no tenía ningún obstáculo o impedimento visual para no ver al tercero que se encontraba en el otro vehículo, como se puede apreciar:

Imagen que contiene Texto

Descripción generada automáticamente

También, según el IPAT, el accidente se dio en una intersección vial, lo cual se puede corroborar en el dibujo que se plasmó en este, así:

Imagen que contiene Diagrama

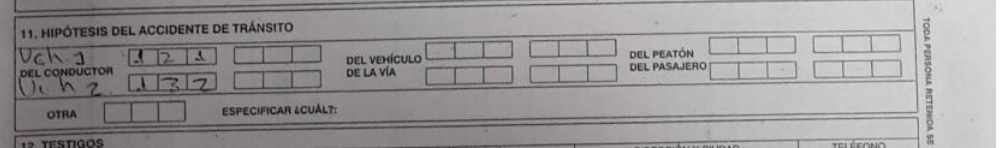
Descripción generada automáticamente

Además, el IPAT también indica que la vía se encontraba en línea recta, por ello, al estar cerca de una intersección la demandante estaba obligada a conducir máximo a 30 km/h, por ende, tenia tiempo más que suficiente para visualizar al tercero, como se puede observar:

Un periódico con texto

Descripción generada automáticamente con confianza media

Luego, el IPAT también indica como hipótesis del caso una culpa o hecho de la víctima al conducir sin mantener la distancia respectiva, puesto que la motocicleta de la demandante es el que aparece como Veh 1, y la causa es la 121, tal y como se puede evidenciar:



Por ende, del mismo IPAT se observa que lo que provocó el daño fue la conducta de la demandante, pues, la actora no mantuvo la distancia de seguridad, además, del IPAT se evidencia que no existió ninguna causal derivada de la vía en la existencia del choque vehicular, dado que, tal y como se ha desarrollado en todo este escrito, la vía se encontraba en perfecto estado y con buena señalización.

Por tanto, analizando lo indicado por la demandante en el libelo demandatorio, se evidencia que la parte actora manifiesta que fue la falta de señalización la que provocó el accidente, no obstante, de las mismas pruebas aportadas por esta, se puede constatar que esa afirmación es errónea, teniendo en cuenta que i) la actora violó la normatividad de transitó al conducir sin la respectiva distancia de seguridad, ii) si hubiera conducido a la velocidad señalada por la norma, es decir, hasta los 30 km/h, hubiese tenido tiempo más que suficiente para ver el otro vehículo y pudo haber reaccionado esquivándolo o reduciendo la velocidad, teniendo presente que era una vía recta con una buena iluminación, buena señalización y con condiciones climáticas adecuadas. iii) habla de la concurrencia de culpas con el otro vehículo implicado, lo que per sé implica que las pretensiones debieron haberse dirigido contra éste. iv) Finalmente, la vía se encontraba señalizada y en perfecto estado.

En conclusión, se debe observar dentro del proceso que la conducta de la víctima fue la determinante para que se produzca el supuesto daño, aunado a esto, en el proceso no existe prueba alguna de una omisión de sus deberes o incumplimiento contractual por parte de **NUEVO CAUCA S.A.S.** Así, es posible evidenciar un hecho o culpa de la víctima.

* **SUBSIDIARIAMENTE, EN EL EVENTO QUE EL DESPACHO NO CONSIDERE LA EXISTENCIA DE UNA CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA Y ATRIBUYA LA CAUSA EFICIENTE A LA ENTIDAD TERRITORIAL, SE DEBERÁ EVALUAR LA CONDUCTA DEL DEMANDANTE POR LA TEORIA DE LA CONCURRENCIA DE CULPAS**

Si bien es cierto dentro de las pruebas aportadas por las partes dentro del proceso no se evidencia que la ocurrencia del hecho sea imputable al distrito, ni existe un nexo causal, no está demás aclarar que en el remotísimo evento que se encuentre probado el hecho y que además por alguna extraña razón este sea imputable a **NUEVO CAUCA S.A.S.**,se deberá analizar la conducta de la actora por la teoría de la concurrencia de culpas.

El Código Civil en su artículo 2357 establece que “*La apreciación del daño está sujeta a reducción, si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente*.” Bajo las reglas del citado artículo, para el análisis del daño, se deberá evaluar la conducta de la víctima, y si concurrió un actuar negligente para la materialización del mismo.

En el presente caso, se explicó que la actora violó la normatividad de tránsito al no respetar la distancia de seguridad y posiblemente conducir a una velocidad mayor, por tanto, fueron estas conductas las que produjeron el hecho, asimismo, la demandante no tomó acciones correspondientes para que no se produzca el supuesto daño. Por ello, en caso de que no sea suficiente para romper el nexo casual, se deberá evaluar tal conducta bajo el criterio establecido en el artículo 2357 del código civil.

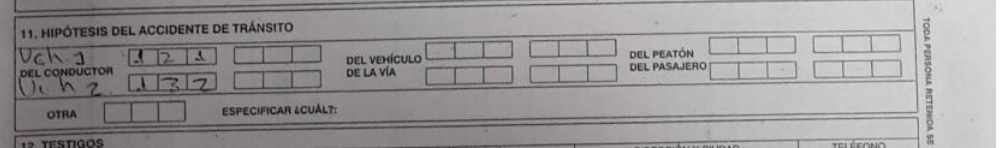
Se puede concluir que la conducta determinante de la supuesta colisión vehicular, es decir, existe una responsabilidad de la actora en la supuesta comisión del daño, no obstante, si se encuentra algún tipo de responsabilidad de **NUEVO CAUCA S.A.S.**,**,** además, que la conducta de la actora no fue lo suficientemente determinante, se deberá analizar el hecho desde la concurrencia de culpas y en caso de que exista algún perjuicio que reparar, aplicar los respectivos descuentos que haya lugar.

1. **HECHO EXCLUSIVO Y DETERMINANTE DE UN TERCERO**

En caso de que se consideré de que el daño no ocurrió por un hecho de la conducta de la víctima, se debe tener presente que la conducta activa de un tercero no imputable a **NUEVO CAUCA S.A.S.**,**,** fue determinante para que se materialice el supuesto daño. Siendo más concretos la conducta activa del conductor del vehículo de placas OYJ207 con en el que colisionó la demandante el día 23 de agosto de 2019.

El Consejo de Estado con respecto a la responsabilidad de terceros ha determinado que “*el hecho del tercero se configura como causal de exoneración de responsabilidad cuando se prueba que es la causa exclusiva del daño. Por ello se exige que ese tercero sea completamente ajeno a la administración y que su acción sea imprevisible e irresistible*. (Consejo de Estado, 2021, 08001-23-31-000-2001-01676-01(39063))”

Se debe tener presente que en caso concreto la negligencia y violación a las normas de tránsito de un tercero fue lo que provocó el daño, toda vez que, según las pruebas aportadas por la demandante, el IPAT evidencia que tanto la victima como el tercero tuvieron la culpa en la colisión vehicular, Así:



Nótese que el vehículo del tercero fue descrito como “Veh2” y según la imagen anterior, el tercero no respetó la prelación en la intersección vial, por ende, actuó negligentemente irrespetando la normatividad de tránsito, al igual que la actora.

En consecuencia, solicito que se declare probada esta excepción y por ello, declare que la responsabilidad es atribuible a un tercero el cual no violó el deber de cuidado y actuó negligentemente al ejecutar un actividad peligrosa, al conducir de manera irresponsable y no tomar respetar la prelación al pasar por una intersección.

1. **EXCEPCIONES PLANTEADAS POR QUIEN FORMULÓ EL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA A MI REPRESENTADA**.

Coadyuvo las excepciones propuestas por **NUEVO CAUCA S.A.S.** sólo en cuanto las mismas no perjudiquen los intereses de mi representada.

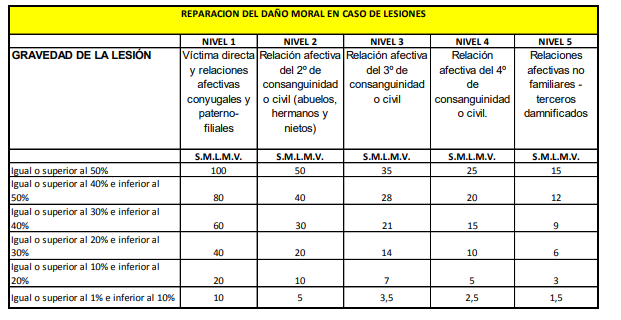
1. **IMPROCEDENTE RECONOCIMIENTO DE PERJUICIOS INMATERIALES:**

Antes de abordar la oposición a los rubros señalados en la demanda, es menester indicar que los perjuicios no son indemnizables en el caso, porque no revisten antijuridicidad, ya que ante el análisis de la imputabilidad fáctica no se observa, ni se prueba que **NUEVO CAUCA S.A.S.** haya participado con su conducta en los hechos que lo produjeron, ni tampoco es jurídicamente imputable al compañía accionada por cuanto no se acredita una transgresión a un deber o una obligación de estirpe legal, ni constitucional, ni contractual.

* 1. **Frente a los perjuicios morales:**

La tasación propuesta del daño moral es exorbitante y en tal virtud, no puede ser tenida en cuenta por el despacho. La pretensión resulta excesivamente cuantificada al solicitarse la suma de cien (100) SMLMV, para la supuesta víctima directa, además, de cuarenta (40) SMLMV para cada uno de sus padres, aunado, a las sumas pretendidas para sus hermanos. Esta petición resulta antitécnica, pues no se aportó un documento o una sola prueba que diera cuenta de las supuestas secuelas psicológicas padecidas por los demandantes. Por ese motivo, no puede solicitar un reconocimiento basado en supuestos o sumas hipotéticas.

Ahora bien, debe aclarase que la indemnización no puede ser fuente de enriquecimiento para la presunta víctima. En otras palabras, es imperativo que el juez tenga en cuenta que los principios generales del derecho, la legislación y los criterios jurisprudenciales, establecen que la víctima de un hecho dañoso no puede enriquecerse como consecuencia de una indemnización. Por el contrario, la reparación únicamente debe propender por llevar a la persona al estado previo al acontecimiento del hecho. Por lo anterior y sin que signifique aceptación de responsabilidad alguna en cabeza de mi representada, en el evento que el honorable juez considere que sí se reúnen los elementos de la responsabilidad, comedidamente le solicito desestime la tasación exorbitante de perjuicios propuesta por la demandante. En su lugar, se deberán atender fielmente los criterios jurisprudenciales establecidos por el Consejo de Estado que corresponden a lo siguiente:



Así pues, frente a los perjuicios morales solicitados en el líbelo de la demanda, es preciso señalar que el Consejo de Estado, mediante Sentencia de Unificación del 28 de agosto de 2014, en torno a los montos del resarcimiento cuando se reclaman perjuicios inmateriales, sostuvo lo siguiente:

La reparación moral en caso de lesiones tiene su fundamento en el dolor o padecimiento que se causa a la víctima directa, familiares y demás personas allegadas.

(…)

Deberá verificarse la gravedad o levedad de la lesión causada a la víctima directa, la que determinará el monto indemnizatorio en salarios mínimos. Para las víctimas indirectas se asignará un porcentaje de acuerdo con el nivel de relación en que éstas se hallen respecto del lesionado, conforme al cuadro.

**La gravedad o levedad de la lesión y los correspondientes niveles se determinarán y motivarán de conformidad con lo probado en el proceso.**

Nivel No. 1. **Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales y paterno-filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar (1er. Grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes**). Tendrán derecho al reconocimiento de 100 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 50%, a 80 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior al 40% e inferior al 50%; a 60 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 30% e inferior al 40%; a 40 SMLMV si la gravedad de la lesión es igual o superior al 20% e inferior al 30%; a 20 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 10% e inferior al 20% y, por último, a 10 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior a 1% e inferior a 10%”**.** (Énfasis propio).

Según la jurisprudencia citada, es inviable el reconocimiento de los perjuicios morales en las sumas pretendidas por la parte demandante. Solicitar cien (100) SMLMV para la supuesta víctima directa, además, de cuarenta (40) SMLVM para sus padres y los montos igualmente pretendido para sus hermanos e hija resulta a todas luces exorbitante. Máxime cuando no existe documento que acredite la gravedad de la lesión psicológica, ni que la gravedad de la lesión sea igual o superior al 50%.

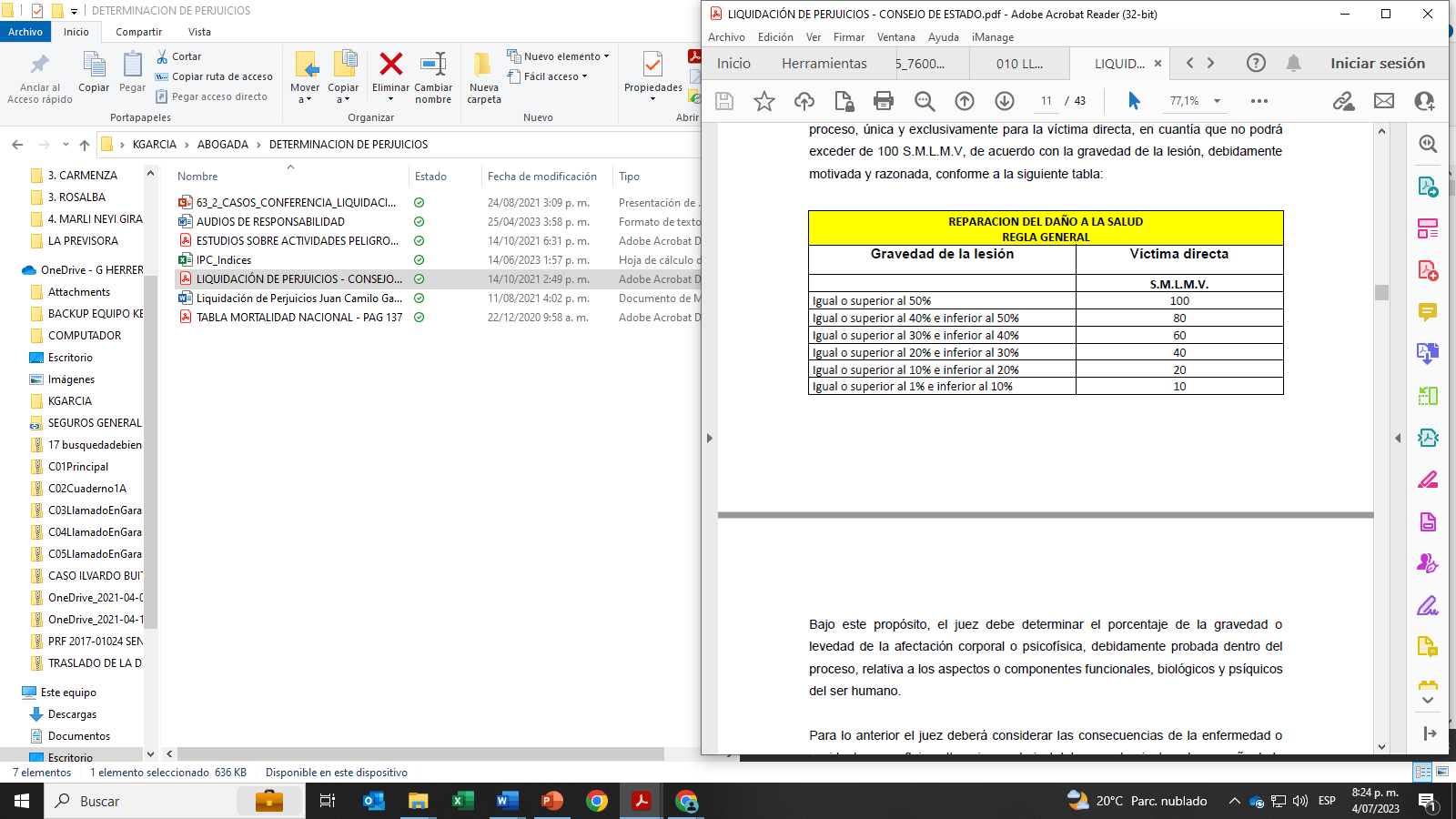
En conclusión, es inviable el reconocimiento por daño moral en las sumas pretendidas por la parte demandante, por cuanto la tasación propuesta es equivocada. En tal sentido, no hay lugar al reconocimiento de suma alguna por concepto que supere los montos fijados a partir de la unificación jurisprudencial del Consejo de Estado. De ese modo, en tanto las sumas solicitadas en las pretensiones de la demanda desconocen los lineamientos establecidos por esa corporación y no se encuentran probadas, deben ser desestimadas.

Por todo lo anterior solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

* 1. **Frente al daño a la salud.**

En primer lugar, es menester indicar que, analizando el caso en concreto, dentro del expediente se solicita una indemnización por esta tipología de perjuicios bajo una premisa completamente errada. Lo anterior, toda vez que no se arrimó una sola prueba que diera cuenta de las supuestas secuelas padecidas por el demandante en razón de la lesión que es objeto de demanda. Por lo cual, al no estar probados estos elementos esenciales, lo alegado en el líbelo inicial tendrá que tenerse por desestimado. Adicionalmente, de forma equivocada se solicita la suma de 100 SMLMV para la supuesta víctima directa del hecho, desbordando los lineamientos establecidos por el Consejo de Estado en Sentencia de Unificación.

Al momento de estimar la solicitud por daño a la salud, se desatendieron completamente los topes máximos de indemnización fijados por el máximo órgano de la Jurisdicción Contencioso Administrativo para la tasación del daño, los cuales son los siguientes:



En tal virtud, la solicitud se encuentra totalmente elevada y desconoce los lineamientos bajo los cuales se reconoce el mismo. Así las cosas, ante la desmesurada solicitud del daño a la salud estimado en 100 SMLMV, para la supuesta víctima directa del hecho, es claro que no podrá proceder tal pretensión, toda vez que es evidente el ánimo especulativo de la errónea tasación de este perjuicio, en tanto el mismo resulta claramente exorbitante e improcedente.

Por lo tanto, al no existir pruebas que acrediten que los daños son producto del hecho, y la responsabilidad en cabeza de la entidad demandada, el despacho deberá desestimar la pretensión. Así mismo deberá tenerse en cuenta los límites fijados por el Consejo de Estado.

En conclusión, es desacertada la petición de reconocimiento del daño a la salud en la suma pretendida por la parte demandante, toda vez que no existen elementos materiales probatorios que den cuenta de la existencia de responsabilidad en cabeza de **NUEVO CAUCA S.A.S.**

1. **IMPROCEDENTE E INDEBIDA ACREDITACIÓN DE LOS PERJUICIOS MATERIALES.**

Antes de abordar la oposición a los rubros señalados en la demanda, es menester indicar que los perjuicios no son indemnizables en el caso, porque no revisten antijuridicidad, ya que ante el análisis de la imputabilidad fáctica no se observa, ni se prueba que **NUEVO CAUCA S.A.S.** haya participado con su conducta en los hechos que lo produjeron, ni tampoco es jurídicamente imputable a la compañía accionada por cuanto no se acredita una transgresión a un deber o una obligación de estirpe legal, ni constitucional, ni contractual.

* 1. **Sobre lucro cesante consolidado y futuro:**

En los hechos ocurridos el día **23 de agosto de 2019**, no existió responsabilidad por parte de **NUEVO CAUCA S.A.S.** al no allegarse una prueba de la falla del servicio o incumplimiento contractual, máxime cuando el hecho se presentó por culpa de la víctima y de un tercero. Por lo tanto, es menester indicar al despacho que, no hay lugar al reconocimiento de indemnización a título de lucro cesante, toda vez que no se aportó prueba de la supuesta pérdida de capacidad laboral o un dictamen que acreditara la gravedad de la lesión para la liquidación. Adicionalmente, la parte actora pretende el reconocimiento de dicho perjuicio sin cumplir con la carga probatoria correspondiente. En el expediente no milita desprendibles de pago de salario, transferencia bancaria, afiliación al Sistema General de Seguridad Social, u otro medio probatorio que acredite y de certeza de la vinculación laboral de la señora **Laura Quira Viquez**, y esta no puede ser susceptible de presunción. Por lo tanto, al no existir elementos materiales probatorios para liquidar este perjuicio material no es procedente su reconocimiento.

El lucro cesante se ha entendido como una categoría de perjuicio material, de naturaleza económica, de contenido pecuniario. Es decir, que puede cuantificarse en una suma de dinero y que consiste en la afectación o menoscabo de un derecho material o patrimonial, reflejado en la ganancia o ingreso que se ha dejado de percibir, que no ingresará al patrimonio de la persona. En efecto, se deja de recibir cuando se sufre un daño y puede ser percibido a título de indemnización por las víctimas directas o indirectas cuando se imputa al causante del perjuicio la obligación de reparar.

No obstante, para indemnizar un daño, además de su existencia cierta, actual o futura, es decir que si no se hubiese producido el daño el ingreso debía percibirse, es necesaria su plena demostración en el proceso con elementos probatorios fidedignos e idóneos, como lo son aquellos medios permitidos en el ordenamiento jurídico.

[Esto](http://incp.org.co/Site/2016/spatia/sentencia-consejo-estado-peritos.pdf) significa que el lucro cesante no puede construirse sobre conceptos hipotéticos, pretensiones fantasiosas o especulativas que se fundan en posibilidades inciertas de ganancias ficticias. Por el contrario, debe existir una cierta probabilidad objetiva que resulte del decurso normal de las cosas y de las circunstancias especiales del caso. De manera que el mecanismo para cuantificar el lucro cesante consiste en un cálculo sobre lo que hubiera ocurrido de no existir el evento dañoso, siempre que logre acreditarse que en efecto la víctima, al momento de la ocurrencia del daño, ejerciera alguna actividad productiva que le generara los ingresos dejados de percibir.

Ahora bien, se debe mencionar que todas las posibles discusiones que pueden emerger frente al particular fueron zanjadas mediante el más reciente pronunciamiento de unificación del Consejo de Estado, en la Sentencia No. 44572 del 18 de julio de 2019. Providencia en la que se elimina la presunción según la cual toda persona en edad productiva percibe al menos un salario mínimo, en tanto contraría uno de los elementos del daño, esto es la certeza. De manera que el lucro cesante solo se reconocerá cuando obren pruebas suficientes que acrediten que efectivamente la víctima dejó de percibir los ingresos o perdió una posibilidad cierta de percibirlos. En dicho pronunciamiento se manifestó literalmente lo siguiente:

La ausencia de petición, en los términos anteriores, así como **el incumplimiento de la carga probatoria dirigida a demostrar la existencia y cuantía de los perjuicios debe conducir, necesariamente, a denegar su decreto**. (…).

En los casos en los que se pruebe que la detención produjo la pérdida del derecho cierto a obtener un beneficio económico, lo cual se presenta cuando la detención ha afectado el derecho a percibir un ingreso que se tenía o que con certeza se iba a empezar a percibir, el juzgador solo podrá disponer una condena si, a partir de las pruebas obrantes en el expediente, se cumplen los presupuestos para ello, frente a lo cual se requiere que se demuestre que la posibilidad de tener un ingreso era cierta, es decir, que correspondía a la continuación de una situación precedente o que iba a darse efectivamente por existir previamente una actividad productiva lícita ya consolidada que le permitiría a la víctima directa de la privación de la libertad obtener un determinado ingreso y que dejó de percibirlo como consecuencia de la detención.

**Entonces, resulta oportuno recoger la jurisprudencia en torno a los parámetros empleados para la indemnización del lucro cesante y, en su lugar, unificarla en orden a establecer los criterios necesarios para: i) acceder al reconocimiento de este tipo de perjuicio y ii) proceder a su liquidación.**

**La precisión jurisprudencial tiene por objeto eliminar las presunciones que han llevado a considerar que la indemnización del perjuicio es un derecho que se tiene per se y establecer que su existencia y cuantía deben reconocerse solo: i) a partir de la ruptura de una relación laboral anterior o de una que, aun cuando futura, era cierta en tanto que ya estaba perfeccionada al producirse la privación de la libertad o ii) a partir de la existencia de una actividad productiva lícita previa no derivada de una relación laboral, pero de la cual emane la existencia del lucro cesante**. (Énfasis propio).

Este pronunciamiento entonces excluye posibilidad alguna de que se reconozca lucro cesante a una persona que, aunque esté en edad productiva, no acredite los ingresos percibidos por el efectivo desarrollo de una actividad económica, por contrariar el carácter cierto del perjuicio, siendo entonces una utilidad meramente hipotética o eventual. Descendiendo al caso objeto de estudio, debe manifestarse que la señora **Laura Quira Viquez** pretende el reconocimiento del lucro cesante (consolidado y futuro) en cuantía de **$ 1.049.509.248**, derivado de las lesiones que le produjo el supuesto accidente, sin aportar contrato laboral, desprendibles de pago, afiliación al Sistema de Seguridad Social en el régimen contributivo, cuentas de ingresos y egresos de la contabilidad de la supuesta miscelánea que acreditara la respectiva vinculación del demandante o declaración de renta. Además, no se sabe cómo el apoderado de los demandantes llegó a esas cifras. Toda vez que no tiene un dictamen de PCL para determinar cuál fue la merma en la capacidad productiva, evidenciando una tasación especulativa de los supuestos perjuicios. Además, de la evidente suma exorbitante que solicita la demandante.

Así mismo, deberá tenerse en cuenta que en el remoto e hipotético caso que se llegue a acreditar la existencia del lucro cesante, se deberá disminuir el 66% que asume las EPS a la que se encontraría afiliado, tal y como lo señala el Código Sustantivo del Trabajo artículo 227: *“VALOR DE AUXILIO. En caso de incapacidad comprobada para desempeñar sus labores, ocasionada por enfermedad no profesional, el trabajador tiene derecho a que el {empleador} le pague un auxilio monetario hasta por ciento ochenta (180) días, así: las dos terceras (2/3) partes del salario durante los primeros noventa (90) días y la mitad del salario por el tiempo restante. (…)”*

Por lo tanto, entendiendo que la señora **Laura Quira Viquez**, no dejó de percibir los rubros como consecuencia del supuesto hecho dañoso, no hay lugar a que el despacho proceda a reconocer el 100% de lo pretendido por lucro cesante, y en el evento que la presente tesis no sea acogida, pues deberá descontarse del mismo el 66.67% como lo establece la norma anteriormente citada. Adicionalmente, es importante tener en cuenta que, ante eventos de incapacidad, el empleador deberá asumir el 100% de los dos (2) primeros días, es decir, que, ante un eventual e hipotético reconocimiento de lucro cesante, también deberá descontarse estos días, pues de lo contrario se generaría un enriquecimiento sin justa causa. No obstante, se resalta que la víctima nunca mencionó que no continuaba ejerciendo el mismo oficio, es decir, no se mermó su capacidad productiva.

En conclusión, al no haberse aportado prueba si quiera sumaria que permita acreditar la ganancia dejada de percibir como consecuencia del hecho dañoso, no resulta procedente la pretensión impetrada en el líbelo genitor, según la cual, debe reconocer y pagarse en favor de la parte actora suma de dinero por concepto de lucro cesante consolidado y futuro.

* 1. **Frente al daño emergente.**

Es menester indicar al despacho que no hay lugar al reconocimiento de indemnización a título de daño emergente. Toda vez que, en primer lugar, este rubro no se liquida bajo supuestos y esta no puede ser susceptible de presunción. En efecto, es necesario una prueba que acredite la causación de los mismos. En segundo lugar, no se allegó una sola prueba al plenario que acreditara que la ocurrencia del supuesto hecho o accidente se deba a una negligencia o incumplimiento de sus deberes por parte **NUEVO CAUCA S.A.S**. En tercer lugar, no se probó las supuestas erogaciones económicas que sufragó la demandante dentro del escrito de la demanda. Por lo tanto, al no existir elementos materiales probatorios para liquidar este perjuicio material, no es procedente su reconocimiento.

Por lo que no hay lugar al reconocimiento de este perjuicio máxime cuando en materia de indemnización de perjuicios, opera el principio de que el daño y su cuantía deben estar plenamente probados para proceder a su reconocimiento, toda vez que al juzgador le está relegada la posibilidad de presumir como cierto un perjuicio y más aún la magnitud del mismo. En efecto, con miras a la obtención de una indemnización, no basta alegar el supuesto detrimento, por cuanto el mismo no es susceptible de presunción, sino que es obligatorio acreditar debidamente su cuantificación.

En igual sentido, se debe memorar el despacho que este corresponde a la pérdida económica por la destrucción o puesta en peligro del bien jurídico y todos aquellos gastos, erogaciones o desembolsos que necesariamente una persona debe hacer para atender todo lo relacionado con la vulneración del mismo o las secuelas que éste deja, y en el caso particular, no existe ninguna prueba efectiva de que la demandante haya efectuado el pago de la suma pretendida, en razón a la supuestas erogaciones que haya debido hacer por el hecho ocurrido **23 de agosto de 2019.** Resaltándose que únicamente obra dentro de las pruebas aportadas por la actora un documento que evidencia el monto que cubrió el SOAT, es decir, que la demandante no realizó dicho pago. Además, un documento que manifiesta que existió perdida total, no obstante, se realizó 3 meses posterior al hecho, por ende, no da certeza de que efectivamente la supuesta perdida se deba única y exclusivamente a la colisión vehicular.

Frente a esta valoración solicito al despacho que se consideren como no probadas, toda vez que no existe dentro del plenario, una prueba fehaciente que determine la cuantía de los gastos en los que supuestamente incurrió el demandante por ocasión del hecho acaecido el **23 de agosto de 2019.**

En conclusión, no puede generarse un pago a cargo de la demandada sobre supuestos que no han sido probados, así como tampoco se encuentra probada la responsabilidad que daría lugar a una posible condena. En estos casos la jurisprudencia señala que solamente los gastos razonables serán indemnizados pues la parte actora no puede aprovechar tal situación para incurrir en señalar gastos excesivos o irrelevantes que no se causaron en razón al objeto de la litis del proceso, así las cosas, no hay lugar al reconocimiento y pago del perjuicio enumerado en este hecho.

Por todo lo anterior solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

1. **GENÉRICA O INNOMINADA**

Solicito señora juez declarar cualquier otra excepción que resulte probada en el decurso del proceso, que se encuentre originada en la ley o en el contrato por el cual se convocó a mi representada, incluida la de prescripción. Lo anterior, conforme a lo estipulado en el art 282 del Código General del Proceso que establece que *“En cualquier tipo de proceso, cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepción deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, que deberán alegarse en la contestación de la demanda”.*

En ese sentido, cualquier hecho que dentro del proceso constituya una excepción se deberá de manera oficiosa reconocerla en sentencia.

Por todo lo anterior solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

**CAPÍTULO III. FRENTE AL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA FORMULADO POR NUEVO CAUCA S.A.S.**

Siguiendo el orden propuesto, en este acápite se desarrollará lo concerniente al llamamiento en garantía formulado por **NUEVO CAUCA S.A.S** a la sociedad que represento. Así pues, se procederá:

1. **FRENTE A LOS HECHOS DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA**

**Frente al hecho del llamamiento en garantía denominado “1”:** Es cierto que entre **NUEVO CAUCA S.A.S.** y la Compañía **CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A** se suscribió el contrato de seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual documentado en la Póliza No. 34248 en coaseguro con las aseguradora **NACIONAL DE SEGURO** con el objeto de amparar entre otros la responsabilidad extracontractual de **NUEVO CAUCA S.A.S.**

**Frente al hecho del llamamiento en garantía denominado “2”:** No es un hecho que aluda al llamamiento, sino son las pretensiones que se ventilan en el proceso. Sin embargo, es cierto, que la señora LAURA DANIELA QUIRA VIQUEZ, pretende que se declare la responsabilidad patrimonial de la sociedad NUEVO CAUCA S.A.S. como consecuencia de los supuestos daños ocasionados como consecuencia del supuesto accidente acaecido el día 23 de agosto de 2019.

**Frente al hecho del llamamiento en garantía denominado “3”:** En este hecho se realizan varias aseveraciones, frente a las cuales procedo a pronunciarme de la siguiente manera:

* Es cierto, solo en cuanto a que, entre **NUEVO CAUCA S.A.S.** y la Compañía **CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A** se suscribió el contrato de seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual documentado en la Póliza No. 34248 en coaseguro con la aseguradora **NACIONAL DE SEGURO** con el objeto de amparar **“***la Responsabilidad Civil Extracontractual por daños a terceros imputables al contratista durante la ejecución del contrato de Concesión bajo el esquema de APP No. 11 de 2015 del 11 de agosto de 2015, cuyo objeto es la financiación, construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación, manteniemiento y reversión del corredor Popayan - Santander de Quilichao, de acuerdo con el Apéndice Técnico 1 y los demás Apéndices Técnicos del contrato”.*
* Ahora bien, con respecto a que en un remoto evento que **NUEVO CAUCA S.A.S.** sea condenado pueda reclamar a mi prohijada, manifiesto que me opongo a que se le condene a pagar a mi prohijada cualquier suma de dinero a título de indemnización que no se encuentre dentro de las condiciones particulares y generales pactadas en la Póliza No. 34248 con vigencia desde el 23 de septiembre de 2018 al 23 de septiembre 2019. Lo anterior, teniendo en cuenta que el hecho de concertar un contrato de seguro no quiere decir que opere automáticamente alguna cobertura, por cuanto el mismo se rige esencialmente por las cláusulas particulares y generales pactadas entre las partes y por supuesto por el Código de Comercio Colombiano.

1. **FRENTE A LAS PRETENSIONES DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA.**

**Frente a la pretensión del llamamiento en garantía denominado “PRIMERA”:** Manifiesto que me opongo a que se le condene a responder a mi prohijada cualquier suma de dinero a título de indemnización que no se encuentre dentro de las condiciones particulares y generales pactadas en la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 34248 con vigencia desde el 23 de septiembre de 2018 al 23 de septiembre 2019. Lo anterior, teniendo en cuenta que el hecho de concertar un contrato de seguro no quiere decir que opere automáticamente alguna cobertura, por cuanto el mismo se rige esencialmente por las cláusulas particulares y generales pactadas entre las partes y por supuesto por el Código de Comercio Colombiano.

**Frente a la pretensión del llamamiento en garantía denominado “SEGUNDA”:** Manifiesto que me opongo a que se le condene a pagar a mi prohijada cualquier suma de dinero a título de indemnización que no se encuentre dentro de las condiciones particulares y generales pactadas en la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 34248 con vigencia desde el 23 de septiembre de 2018 al 23 de septiembre 2019. Lo anterior, teniendo en cuenta que el hecho de concertar un contrato de seguro no quiere decir que opere automáticamente alguna cobertura, por cuanto el mismo se rige esencialmente por las cláusulas particulares y generales pactadas entre las partes y por supuesto por el Código de Comercio Colombiano.

1. **EXCEPCIONES FRENTE AL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA**

Siguiendo el orden propuesto, en este acápite se desarrollará lo concerniente a las excepciones relacionadas a la póliza. Así pues, se procederá:

**EXCEPCIONES RESPECTO A LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL NO. 34248.**

1. **INEXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN INDEMNIZATORIA A CARGO DE CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. POR LA NO REALIZACIÓN DEL RIESGO ASEGURADO EN LA PÓLIZA** **DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 34248.**

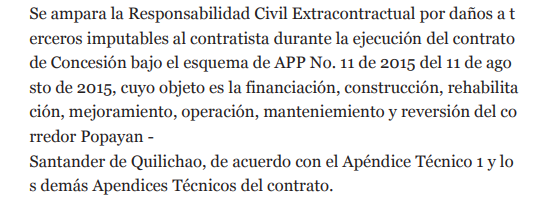
No existe obligación indemnizatoria a cargo de mi representada, toda vez que no se realizó el riesgo asegurado en la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 34248 con vigencia desde el 23 de septiembre de 2018 al 23 de septiembre 2019. En el expediente ciertamente no está demostrada la responsabilidad que pretende el extremo activo endilgar, luego que para justificar sus pretensiones el actor no cuenta con pruebas fehacientes para determinar la causación de los supuestos daños materiales sufridos, así como tampoco allegó pruebas que acreditaran la ocurrencia del accidente del día **23 de agosto de 2019** se deba a una acción u omisión por parte de **NUEVO CAUCA S.A.S.** Toda vez que este hecho se produjo por culpa de la victima y de un tercero**.** En ese sentido, no hay elementos para afectar el contrato de seguro aludido.

El Consejo de Estado ha intentado definir el contrato de seguro en su jurisprudencia, sobre todo el objeto del mismo, indicando lo siguiente:

El Código de Comercio no define el contrato de seguro, pero puede decirse que es aquel por medio del cual una persona legalmente autorizada para ejercer esta actividad, “(…) asume los riesgos ajenos mediante una prima fijada anticipadamente”; o dicho en otras palabras, es aquel contrato por el cual “(…) una parte, el asegurado, se hace prometer mediante una remuneración, la prima, para él o para un tercero, en caso de realización de un riesgo, una prestación por la otra parte, el asegurador (…)”. Se trata de un mecanismo de protección frente a múltiples riesgos que pueden afectar el patrimonio de las personas y que pueden ser asumidos por el asegurador, quien se compromete a pagar una indemnización en caso de realizarse tal riesgo -lo que se traduce en la producción del siniestro- a cambio del pago de una determinada suma de dinero, denominada prima. (Consejo de Estado,2013, 25000-23-26-000-2000-02019-01(25472))

Con fundamento en la cita anterior, se debe tener en cuenta que la póliza se hace exigible una vez ocurre el siniestro, es decir, el cumplimiento del riesgo trasladado, entendiéndose riesgo según el Articulo 1054 Código de Comercio “*el suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador, del asegurado o del beneficiario, y cuya realización da origen a la obligación del asegurador*”.

En este orden de ideas, en concordancia con todo lo referenciado a lo largo del presente escrito, se propone esta excepción toda vez que **CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.** no está obligada a responder, de conformidad con las obligaciones expresamente estipuladas y aceptadas por las partes en el contrato de seguro. Así entonces, es necesario señalar que, al tenor de las condiciones generales documentadas la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 34248 con vigencia desde el 23 de septiembre de 2018 al 23 de septiembre 2019, el amparo que se pretende afectar con la presente acción se pactó así:



De conformidad con lo anterior, se evidencia que el riesgo asegurado en el contrato de seguros en comento no es otro que la “Responsabilidad Civil Extracontractual” en que incurra **NUEVO CAUCA S.A.S.** durante la ejecución del contrato de concesión, asegurado de acuerdo con la legislación colombiana. Dicho de otro modo, el contrato de seguro documentado en la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 34248 con vigencia desde el 23 de septiembre de 2018 al 23 de septiembre 2019 entrará a responder, si y solo sí el asegurado, en este caso **NUEVO CAUCA S.A.S.** es declarado patrimonialmente responsable por los daños irrogados a “terceros” en el desarrollo del contrato de concesión y siempre y cuando no se presente una causal de exclusión u otra circunstancia que enerve los efectos jurídicos del contrato de seguro. Así las cosas, esa declaratoria de responsabilidad Civil Contractual constituirá el “siniestro”, esto es, la realización del riesgo asegurado (Art. 1072 del C.Co.).

De acuerdo con la exposición anterior y teniendo en cuenta lo descrito en el libelo de demanda, así como los medios probatorios aportados al plenario, se tiene que el demandante no acreditó que efectivamente el riesgo asegurado se haya materializado por el concurso de los elementos propios de la responsabilidad y, por consiguiente, las pretensiones de la demanda no están llamadas a prosperar. Adicionalmente, de las pruebas obrantes dentro del expediente se evidencia que el hecho se produjo como resultado de un incumplimiento de los deberes de las partes de un contrato de transporte de personas, es decir, tiene un origen contractual, lo cual evidentemente no está amparado por la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 34248 con vigencia desde el 23 de septiembre de 2018 al 23 de septiembre 2019. En consecuencia, no se logró estructurar una responsabilidad civil en cabeza del asegurado, esto es, no se realizó el riesgo asegurado como condición *sine qua non* para activar la responsabilidad que, eventual e hipotéticamente, pudiera corresponder a la aseguradora.

Se concluye, que al no reunirse los supuestos para que se configure la responsabilidad civil, claramente no se ha realizado el riesgo asegurado por la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 34248 con vigencia desde el 23 de septiembre de 2018 al 23 de septiembre 2019 que sirvió como sustento para demandar de forma directa mi representada. En tal sentido, no surge obligación indemnizatoria alguna a cargo de la aseguradora.

Solicito señora juez declarar probada esta excepción.

1. **EXCLUSIONES DE AMPARO CONCERTADAS EN LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.** **34248.**

En materia de contrato de seguros, es menester señalar que los riesgos excluidos son una serie de coberturas que no se amparan dentro del Contrato de Seguro, en cuyo caso de acaecimiento, eximen al Asegurador de la obligación de satisfacer prestación alguna. Estas coberturas excluidas figuran expresamente en las condiciones generales y particulares de la Póliza. Las cuales, al aplicarse al presente caso, evidencia la ocurrencia de una exclusión de amparo.

En tal sentido, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, consejera ponente Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez, mediante sentencia del 27 de mayo de 2020, se refirió a las exclusiones de la siguiente manera:

Lo anterior, se reitera, en la medida en que si bien desde la perspectiva de la normativa aplicable se cumplieron las condiciones generales de la póliza de seguros para que Seguros del Estado S.A. respondiera por el daño atribuido a la I.P.S. Universitaria de Antioquia, el juez en la valoración probatoria debió revisar si en el caso bajo examen se configuraba alguna de las exclusiones de responsabilidad fijadas contractualmente, en los términos señalados en el numeral 29 del referido contrato de seguro.[[1]](#footnote-1)

Así las cosas, se evidencia cómo por parte del órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, se exhorta a los jueces para tener en cuenta en sus providencias las exclusiones contenidas en los contratos de seguro.

Razón por la cual, es menester señalar que la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 34248 con vigencia desde el 23 de septiembre de 2018 al 23 de septiembre 2019 en su página 3 y desde su página 8 señala una serie de exclusiones, que si bien en esta etapa del proceso no se evidencia responsabilidad del asegurado, en un remotísimo evento que en el desarrollo del proceso se llegaré imputar algún tipo de responsabilidad, solicito expresamente se apliquen al caso concreto.

En conclusión, bajo la anterior premisa, en caso de configurarse alguna de las exclusiones arriba señaladas o las que constan en las condiciones generales y particulares de la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 34248 con vigencia desde el 23 de septiembre de 2018 al 23 de septiembre 2019, éstas deberán ser aplicadas y deberán dársele los efectos señalados por la jurisprudencia. En consecuencia, no podrá existir responsabilidad en cabeza del asegurador como quiera que se convino libre y expresamente que tal riesgo no estaba asegurado.

1. **CARÁCTER MERAMENTE INDEMNIZATORIO QUE REVISTEN LOS CONTRATOS DE SEGURO.**

Es un principio que rige el contrato de seguro de daños, el carácter indemnizatorio del mismo, esto es, que el contrato de seguro tiene como interés asegurable la protección de los bienes o el patrimonio de una persona que pueda afectarse directa o indirectamente por la realización del riesgo. De modo que la indemnización que por la ocurrencia de dicho siniestro corresponda, nunca podrá ser superior al valor asegurado. Así las cosas, el carácter de los seguros de daños y en general de cualquier seguro, es meramente indemnizatorio, esto es, que no puede obtener ganancia alguna el asegurado/beneficiario con el pago de la indemnización. Es decir, no puede nunca pensarse el contrato de seguro como fuente de enriquecimiento.

La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, respecto al carácter indemnizatorio del Contrato de Seguro, en sentencia del 22 de julio de 1999, expediente 5065, dispuso:

Este contrato no puede ser fuente de ganancias y menos de riqueza, sino que se caracteriza por ser indemnizatorio. La obligación que es de la esencia del contrato de seguro y que surge para el asegurador cumplida la condición, corresponde a una prestación que generalmente tiene un alcance variable, pues depende de la clase de seguro de la medida del daño efectivamente sufrido y del monto pactado como limitante para la operancia de la garantía contratada, y que el asegurador debe efectuar una vez colocada aquella obligación en situación de solución o pago inmediato.

En tal sentido, el artículo 1088 del Código de Comercio estableció lo siguiente: **“*Respecto del asegurado, los seguros de daños serán contratos de mera indemnización y jamás podrán constituir para él fuente de enriquecimiento.*** *La indemnización podrá comprender a la vez el daño emergente y el lucro cesante, pero éste deberá ser objeto de un acuerdo expreso” (Subrayado y negrilla fuera de texto).*

Así las cosas, no debe perderse de vista que las solicitudes deprecadas en el escrito de demanda por conceptos de: perjuicios morales, daño emergente y el lucro cesante, no son de recibo por cuanto su reconocimiento por parte de **NUEVO CAUCA S.A.S.**, implicaría correlativamente una transgresión del principio indemnizatorio esencial del contrato de seguro. Lo anterior, puesto que se enriquecería la parte demandante recibiendo una indemnización por parte de la entidad que nada tuvo que ver con los supuestos daños a la demandante.

Conforme a ello, dado que los perjuicios solicitados en el petitum de la demanda presentan serias inconsistencias, reconocer el pago de suma alguna con cargo a la póliza de seguro, implicaría correlativamente transgredir el carácter meramente indemnizatorio que revisten los contratos de seguro. En efecto, se estaría supliendo la carga probatoria de la parte actora frente a los presupuestos de una responsabilidad patrimonial del Estado y eventualmente enriqueciendo a los accionantes.

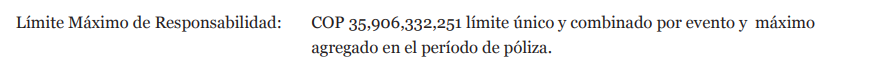
En conclusión, no puede perderse de vista que el contrato de seguro no puede ser fuente de enriquecimiento y que el mismo atiene a un carácter meramente indemnizatorio. Por todo lo anterior y teniendo en cuenta la indebida solicitud y tasación de perjuicios, se deberá declarar probada la presente excepción, y así evitar la contravención del carácter indemnizatorio del contrato de seguro y un correlativo un enriquecimiento sin justa causa en cabeza de la actora.

1. **LÍMITES MÁXIMOS DE RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADOR Y CONDICIONES PACTADOS EN EL CONTRATO DE SEGURO DOCUMENTADO EN LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.** **34248.**

En gracia de discusión, sin que implique reconocimiento de responsabilidad, debe destacarse que la eventual obligación de mi procurada se circunscribe en proporción al límite de la cobertura para los eventos asegurables y amparados por el contrato. En el caso en concreto se estableció un límite de **TREINTA Y CINCO** **MIL NOVECIENTOS SEIS MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ($35.906.332.251)**, los cuales se encuentran sujetos a la disponibilidad de la suma asegurada. La ocurrencia de varios siniestros durante la vigencia de la póliza va agotando la suma asegurada, por lo que es indispensable que se tenga en cuenta la misma en el remoto evento de proferir sentencia condenatoria en contra de nuestro asegurado.

De acuerdo a lo preceptuado en el artículo 1079 del Código de Comercio, el asegurador estará obligado a responder únicamente hasta la concurrencia de la suma asegurada, sin excepción y sin perjuicio del carácter meramente indemnizatorio de esta clase de pólizas, consagrado en el artículo 1088 ibídem, que establece que los seguros de daños serán contratos de mera indemnización y jamás podrán constituirse en fuente de enriquecimiento.

Ahora bien, exclusivamente en gracia de discusión, sin ánimo de que implique el reconocimiento de responsabilidad en contra de mi representada, se debe manifestar que en la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 34248 con vigencia desde el 23 de septiembre de 2018 al 23 de septiembre 2019, se indicaron los límites para los diversos amparos pactados, de la siguiente manera:



Conforme a lo señalado anteriormente, en este caso en particular, operaría la suma asegurada equivalente **TREINTA Y CINCO** **MIL NOVECIENTOS SEIS MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ($35.906.332.251)**. En todo caso, se reitera, que las obligaciones de la aseguradora están estrictamente sujetas a estas condiciones claramente definidas en la póliza, con sujeción a los límites asegurados y a la fehaciente demostración, por parte del asegurado en este caso, del real y efectivo acaecimiento del evento asegurado.

De conformidad con estos argumentos, respetuosamente solicito declarar probada la excepción denominada “Límites máximos de responsabilidad del asegurador y condiciones de laPóliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 34248 con vigencia desde el 23 de septiembre de 2018 al 23 de septiembre 2019 los cuales enmarcan las obligaciones de las partes, planteada en favor de los derechos e intereses de mi procurada.

1. **NO DEBE DESCONOCER LA EXISTENCIA DEL DEDUCIBLE PACTADO EN LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.** **34248.**

En gracia de discusión y sin que implique reconocimiento de responsabilidad, debe destacarse que de la eventual obligación de mi procurada se debe descontar el deducible pactado. Debe tenerse en cuenta que el deducible corresponde a la fracción de la pérdida que debe asumir directamente y por su cuenta el asegurado, **NUEVO CAUCA S.A.S.**, y, en este caso para la póliza, se pactó de **10% del valor de la pérdida como mínimo 40 SMLMV.**

El deducible, el cual está legalmente permitido, luego que se encuentra consagrado en el artículo 1103 del Código de Comercio reza que *“las cláusulas según las cuales el asegurado deba soportar una cuota en el riesgo o en la pérdida, o afrontar la primera parte del daño, implican, salvo estipulación en contrario, la prohibición para el asegurado de protegerse respecto de tales cuotas, mediante la contratación de un seguro adicional. La infracción de esta norma producirá la terminación del contrato original”*

En síntesis, el deducible comporta la participación que asume el asegurado cuando se presenta el siniestro, el cual se manifiesta en un valor o porcentaje pactado en la póliza de seguro.

Por consiguiente, debe tenerse presente que, una vez se encuentre fehacientemente probado el evento asegurado, el Juez deberá, al momento de atribuir responsabilidades sobre la indemnización del presunto daño antijurídico causado, aplicar el monto que, al asegurado **NUEVO CAUCA S.A.S.** le correspondería cubrir en virtud del deducible pactado.

En el caso concreto, el deducible se encuentra pactado en la Póliza No 34248 con vigencia desde el 23 de septiembre de 2018 al 23 de septiembre 2019 de la siguiente manera:

Texto

Descripción generada automáticamente

Se aclara además que en vista de que se pactó un porcentaje y una suma específica, deberá aplicarse, de acuerdo a lo estipulado en la póliza, el que una vez calculado sea mayor.

En conclusión, si en la causa bajo su conocimiento ocurre el improbable caso de endilgarse responsabilidad a la demandada y asegurada y a mi mandante se le hiciera exigible la afectación del aseguramiento, **NUEVO CAUCA S.A.S.** tendría que cubrir el monto anteriormente indicado como deducible. Esto es sólo posible en el hipotético de que **NUEVO CAUCA S.A.S.** sea hallado patrimonialmente responsable de conformidad con las pruebas allegadas el proceso. Lo cual, analizado el expediente, considera el suscrito es altamente improbable, como quiera que, en el asunto de marras, no existe responsabilidad frente a **NUEVO CAUCA S.A.S.**

1. **COASEGURO E INEXISTENCIA DE SOLIDARIDAD CONTENIDA EN LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 34248.**

La póliza utilizada como fundamento para vincular a mi representada como tercero patrimonialmente responsable, revela que la misma fue tomada por **NUEVO CAUCA S.A.S**. bajo la figura de coaseguro, por consiguiente, mi representada solamente debe responder hasta el porcentaje pactado dentro del contrato y no de manera solidaría con las coaseguradoras.

El artículo 1092 del Código de Comercio, que estipula que “*En el caso de pluralidad o de coexistencia de seguros,* ***los aseguradores deberán soportar la indemnización debida al asegurado en proporción a la cuantía de sus respectivos contratos****, siempre que el asegurado haya actuado de buena fe. La mala fe en la contratación de éstos produce nulidad”. (Subrayado y negrilla fuera de texto).*

Lo consignado en la norma en cita se aplica al coaseguro, por estipulación expresa del artículo 1095 del estatuto mercantil, el cual que establece “*las normas que anteceden se aplicarán igualmente* ***al coaseguro, en virtud del cual dos o más aseguradores, a petición del asegurado o con su aquiescencia previa, acuerdan distribuirse entre ellos determinado seguro”.*** *(Subrayado y negrilla fuera de texto).*

Dada la figura del coaseguro y de conformidad con lo anterior, la responsabilidad de cada una de las coaseguradoras está limitada al porcentaje antes indicado, ya que no existe solidaridad entre ellas.

En concordancia con lo señalado por el Consejo de Estado en Sentencia del 26 de enero de 2022 que reza *“Es claro para la Sala que las obligaciones que asumen las coaseguradoras son conjuntas en proporción al porcentaje de riesgo aceptado por cada una de ellas y no existe en este caso solidaridad legal ni contractual entre ellas[…]”* (Consejo de Estado, 2022, 25000232600020110122201 (50.698))

Una vez detallada la póliza de responsabilidad civil extracontractual general No **420-80 994000000202** se puede evidenciar que se pactó en la modalidad de coaseguro, distribuyendo el riesgo entre **CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. (50.00%),** Y **NACIONAL DE SEGURO (50.00%).**

En ese sentido, existiendo un coaseguro, es decir, estando distribuido el riesgo entre mi representada y las compañías de seguros mencionadas, la responsabilidad de cada una de las coaseguradoras está limitada al porcentaje antes señalado, pues de ninguna manera puede predicarse una solidaria entre ellas. Por lo anterior, **CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.** únicamente podrá responder hasta el **50%.**

En conclusión, existiendo coaseguro, de acuerdo con el cual cada aseguradora asumió el porcentaje arriba señalado, se destaca que ni siquiera en el improbable caso de que fueran viables las pretensiones de la parte actora, podría condenarse a mi representada por lo que le corresponde a las otras coaseguradoras. Lo anterior, como quiera que en el coaseguro las compañías aseguradoras no son solidarias, como se desprende del artículo 1092 del Código de Comercio, debido a que cada asegurador deberá soportar la indemnización debida, en proporción a la cuantía de su participación porcentual.

1. **AUSENCIA DE SOLIDARIDAD ENTRE MI MANDANTE Y NUEVO CAUCA S.A.S**

Esta excepción se propone con fundamento en que la solidaridad surge exclusivamente cuando la ley o la convención la establecen. En el caso que nos ocupa, la fuente de las obligaciones de mi procurada está contenida en el contrato de seguro y en él no está convenida la solidaridad entre las partes del contrato.

Nos encontramos frente a dos responsabilidades diferentes a saber: 1. la del asegurado por la responsabilidad civil extracontractual que se le llegaré a atribuir, cuya fuente de obligación indemnizatoria emana de le ley propia y, 2. la de mí representada cuyo fundamento no emanan de la ley propiamente dicha, sino de la existencia de un contrato de seguro celebrado dentro de los parámetros de los artículos 1036 del Código de Comercio y S.S., encontrándose entonces que las obligaciones del asegurado y de la aseguradora son independientes y, por tanto, carentes de solidaridad.

La Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil y mediante ponencia del Dr. Ariel Salazar Ramírez en sentencia SC20950-2017 Radicación n° 05001-31-03-005-2008- 00497-01 ha indicado que: *“(…) Por último, la compañía aseguradora no está llamada a responder de forma solidaria por la condena impuesta, sino atendiendo que «el deber de indemnizar se deriva de una relación contractual, que favoreció la acción directa por parte del demandante en los términos del artículo 1134 del C. de Co (…)”.*

Entendido lo anterior, es preciso indicar que la solidaridad de las obligaciones solo se origina por pacto entre los contrayentes que expresamente la convenga, de acuerdo con el art. 1568 del Código Civil Colombiano que reza:

En general cuando se ha contraído por muchas personas o para con muchas la obligación de una cosa divisible, cada uno de los deudores, en el primer caso, es obligado solamente a su parte o cuota en la deuda, y cada uno de los acreedores, en el segundo, sólo tiene derecho para demandar su parte o cuota en el crédito. Pero en virtud de la convención, del testamento o de la ley puede exigirse cada uno de los deudores o por cada uno de los acreedores el total de la deuda, y entonces la obligación es solidaria o in solidum. La solidaridad debe ser expresamente declarada en todos los casos en que no la establece la ley.

En virtud de tal independencia en las obligaciones, se hace evidente la ausencia de solidaridad, de manera que la responsabilidad de mi representada está atada exclusivamente por las condiciones pactadas en la póliza, esto es, el límite asegurado para cada amparo, las condiciones del contrato de seguro, y por la normatividad que lo rige.

Debe aclararse que las obligaciones de la aseguradora que represento están determinadas por el límite asegurado para cada amparo, por las condiciones del contrato de seguro y por la normatividad que lo rige. Por lo tanto, la obligación indemnizatoria está estrictamente sujeta a las estipulaciones contractuales y al límite asegurado, con sujeción a las condiciones de cada póliza; en virtud de ello, es válido afirmar desde ya que, de conformidad con la exposición previa, no le asiste a mi representada en todo caso la obligación de hacer efectivas la póliza de responsabilidad civil contractual vinculada en esta contienda, toda vez que el acaecimiento del riesgo asegurado y otorgado en la misma, no se ha demostrado y se tiene que esta no se afectaría como resultado de la configuración de una causal de exclusión de responsabilidad indemnizatoria taxativamente determinada en la caratula de las mismas.

Respetuosamente solicito declarar probada esta excepción.

1. **PAGO POR REEMBOLSO**

Sin que el planteamiento de esta excepción constituya aceptación de responsabilidad alguna por parte de mi representada. Se solicita al honorable juez que, en el remotísimo caso de encontrar responsable al asegurado y de llegar a establecer que ha surgido alguna obligación resarcitoria en cabeza de la aseguradora, respetuosamente se manifiesta que la obligación de mi representada deberá imponerse por reembolso y no por pago directo al demandante, ya que es el asegurado quien debe decidir si afecta o no el seguro, quedándole la opción de realizar el pago directo de la hipotética condena.

Así las cosas, se solicita que en el remoto caso de condena la misma no sea a través de pago directo, **sino por rembolso o reintegro**, pues así fue señalado en los hechos del mismo

1. **DISPONIBILIDAD DEL VALOR ASEGURADO**

Sin que con el planteamiento de esta excepción se esté aceptando responsabilidad alguna por parte de mi representada, es pertinente manifestar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 1111 del Código de Comercio, el valor asegurado de una póliza se reducirá conforme a los siniestros presentados y a los pagos realizados por la Aseguradora, por tanto, a medida que se presenten más reclamaciones por personas con igual o mayor derecho y respecto a los mismo hechos, dicho valor se disminuirá en esos importes, siendo que, si para la fecha de la sentencia y ante una condena, se ha agotado totalmente el valor asegurado, no habrá lugar a obligación indemnizatoria por parte de mi prohijada.

Solicito respetuosamente a la señora Juez, declarar probada esta excepción.

1. **GENÉRICA O INNOMINADA**

Solicito señora Juez declarar cualquier otra excepción que resulte probada en el decurso del proceso, que se encuentre originada en la Ley o en el contrato por el cual se convocó a mi representada, incluida la de prescripción del contrato de seguro

Lo anterior, conforme a lo estipulado en el art 282 del Código General del Proceso establece que *“En cualquier tipo de proceso, cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepción deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, que deberán alegarse en la contestación de la demanda”.*

En ese sentido, cualquier hecho que dentro del proceso constituya una excepción se debera de manera oficiosa reconocerla en sentencia.

Por todo lo anterior solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

#### **CAPÍTULO IV. MEDIOS DE PRUEBA**

Solicito respetuosamente se decreten como pruebas las siguientes:

* **DOCUMENTALES**

1. Original del poder que me faculta para actuar como apoderado general de **CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.**

1. Certificado de existencia y representación legal de **CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.**
2. Copia de la carátula, el condicionado particular y general de la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No.34248 con vigencia desde el 23 de septiembre de 2018 al 23 de septiembre 2019 el cual su tomador y asegurado es **NUEVO CAUCA S.A.S**.

* **INTERROGATORIO DE PARTE**

Solicito amablemente que se decrete interrogatorio de parte la demandante, la señora LAURA DANIELA QUIRA VIQUEZ**,** para que absuelva el interrogatorio de parte que de manera verbal o en sobre cerrado les formularé, en relación con los hechos materia de este proceso.

* **TESTIMONIO**

Solicito amablemente que se decrete el testimonio del señor Agente de Tránsito CARLOS DEIBY ASTUDILLO BOLAÑOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 14.801.186, para que rinda testimonio sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que ocurrió el hecho, además, para que realice una explicación y aclaración del Informe Policial de Accidentes de Tránsito (IPAT) que diligenció. Por otro lado, desconocemos si el testigo cuenta con correo electrónico, tampoco tenemos conocimiento de su lugar de residencia o domicilio, por ello, solicito que sea notificado en las instalaciones del MINISTERIO DEL TRASPORTE, por tanto, ruego señor juez que sea dicha cartera la que se encargue de notificarlo.

* **RATIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PROVENIENTES DE TERCEROS:**

El artículo 262 del Código General del Proceso faculta a las partes dentro de un proceso para que, si a bien lo tienen, soliciten la ratificación de los documentos provenientes de terceros aportados por la parte contraria. Vale la pena resaltar que esta disposición establece una clara consecuencia jurídica ante el evento en que una parte solicite la ratificación del documento y ello no se lleve a cabo: *“Documentos declarativos emanados de terceros. Los documentos privados de contenido declarativo emanados de terceros se apreciarán por el juez sin necesidad de ratificar su contenido,* ***salvo que la parte contraria solicite su ratificación (…)”.***

Entonces, cabe resaltar que juez sólo podrá apreciar probatoriamente los documentos cuya ratificación se solicita si efectivamente ésta se hace, como lo consagra el citado artículo.

En virtud, solicito al despacho que no se les conceda valor alguno demostrativo a los documentos provenientes de terceros aportados por la parte demandante mientras esta no solicite y obtenga su ratificación, y entre ellos, de manera enunciativa enumero los siguientes:

1. Certificado de vinculación e ingresos expedido por VATIA S.A. E.S.P. suscrito por la señora **JULIANA CACERES SANCHEZ**

* **CONTRADICCIÓN DE DICTAMEN PERICIAL**

El artículo 228 del código General del Proceso permite que se pueda solicitar la contradicción de un dictamen pericial aportado por una de las partes, puesto que indica “*La parte contra la cual se aduzca un dictamen pericial podrá solicitar la comparecencia del perito a la audiencia(…)*” Por ello, teniendo presente que la parte demandante aportó una prueba pericial expedida por el señor ISRAEL PINO LLANTEN identificado con cedula de ciudadanía No. 1061701005, ruego su señoría que se ordene comparecer a dicho perito a audiencia para que bajo juramento explique el contenido del dictamen.

#### **CAPÍTULO V. NOTIFICACIONES**

A la parte actora, y su apoderado, en las direcciones referidas en el escrito de la demanda.

A mi procurada **CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.** en la carrera 7 número 71-21 torre B piso 7, de la ciudad de Bogotá D.C. Email: [notificacioneslegales.co@chubb.com](mailto:notificacioneslegales.co@chubb.com)

Al suscrito en la Avenida 6 A Bis No. 35N–100 Oficina 212 de la ciudad de Cali (V); correo electrónico: [notificaciones@gha.com.co](mailto:notificaciones@gha.com.co)

Texto, Carta

Descripción generada automáticamente

Cordialmente,

**GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA**

C.C. No. 19.395.114 de Bogotá

T.P. No. 39.116 del C. S. de la J.

1. Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, consejera ponente Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez de fecha 27 de mayo de 2020. [↑](#footnote-ref-1)